



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
AREA DE DEFENSA JUDICIAL

Honorable Juez

CARLOS ARTURO GRISALES LEDESMA

Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali

E. S. D

REFERENCIA:	CONTESTACIÓN DE LA REFORMA DE LA DEMANDA
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DIRECTA
PROCESO:	76001-33-33-015-2023-00206-00
DEMANDANTE:	ELIZABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y OTROS
DEMANDADO:	LA NACIÓN – MIN DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL

GABRIEL ANDRES GALLEGO OLAYA, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 10.499.527 de Santander de Quilichao (Cauca), portador de la tarjeta profesional Nro. 289.834 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, conforme al poder que se allega proferido por el señor de Secretario General de la Policía Nacional y dentro del término legal consagrado en el Artículo 172 del CPACA y 612 del Código General del Proceso, me permito **CONTESTAR LA REFORMA DE LA DEMANDA**, en los siguientes términos;

FRENTE A LOS HECHOS Y LAS PRETENSIONES

Manifiesto a su señoría, que me opongo a los hechos y pretensiones de la demanda, donde la parte actora menciona que el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, son administrativamente y patrimonialmente responsables, de los daños y perjuicios antijurídicos que le fueron causados a los demandantes con ocasión a la desafortunada muerte del señor NEISON SÁNCHEZ GONZÁLEZ (q.e.p.d), en hechos ocurridos el día 4 de mayo del año 2021 en el barrio Siloé de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Frente a los cuales, es imposible pretender responsabilizar a las **NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL**, debido a que como se observa en el plenario, no se han demostrado todos y cada uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual del Estado y mucho menos de ha demostrado la supuesta relación de causalidad; aunado a lo anterior, podemos decir desde ya, que partiendo de las circunstancias planteadas en la demanda que carecen de exactitud y pruebas determinantes que sustenten su veracidad, estaríamos frente a eximentes de responsabilidad como más adelante me referiré.

De igual forma, debo indicar al Honorable Juez, lo que pretende el apoderado de la parte demandante es ligar una lesión mortal con ocasión a los hechos ocasionados por grave alteración del orden público en la ciudad Santiago de Cali (valle), con el fin de responsabilizar administrativamente a la Policía Nacional, aunado a ello, en lo que se refiere a éstos hechos, el apoderado actor solo se sustenta en la subjetividad del demandante, pues para ello y si así lo considera, la parte actora deberá ceñirse a los postulados del artículo 167 del C.G.P, donde la carga de la prueba compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte; por lo tanto, es indispensable demostrar, por los medios legalmente dispuestos para tal fin, los hechos que sirven de fundamento fáctico de la solicitud, de modo que la mera

afirmación de los mismos no sirve para ello. Es decir, debe probarse a lo largo del proceso, teniendo en cuenta las pruebas que decrete el Honorable despacho y las que sean aportadas en el litigio, además es una apreciación intrínseca que necesita de la valoración probatoria por parte del despacho judicial, donde las pruebas señalen, que sin lugar a dudas que existe una responsabilidad administrativa de la Policía Nacional.

Así las cosas, se colige que no se observa la falla del servicio en la que hubiese podido incurrir la administración, por lo tanto, considero que no puede haber lugar a condenas o pago de los supuestos perjuicios sufridos, en contra de la NACIÓN – **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL**, puesto que no se acreditan en dichas pretensiones ni en el proceso los elementos o requisitos que estructuran la falta o falla del servicio endilgada a la Policía Nacional, no logra este demostrar ni siquiera uno de los elementos establecidos por el Consejo de Estado para declarar la falla del servicio o responsabilidad de la Administración. Dado que para se estructure la responsabilidad del Estado, es necesario que converjan los elementos estructurales de acuerdo al régimen de responsabilidad invocada por la ocurrencia de los hechos, igual sí la ocurrencia de los hechos tuvo lugar bajo una causal exonerativa de responsabilidad deberá negarse las pretensiones de la demanda en el presente caso.

Aunado a ello debo advertir, ni en los hechos ni en las pruebas aportadas se menciona de manera objetiva las circunstancias de modo, tiempo y lugar que conllevaron a la desafortunada muerte del señor NEISON SÁNCHEZ GONZÁLEZ (q.e.p.d), dado que el apoderado de la parte accionante solo se fundamenta en indicar que las agresiones mortales fueron proporcionadas al hoy óbitado ejercía su derecho a la protesta social en contra del Gobierno Nacional, cuando se encontraba participando de las actividades que se efectuaban en la glorieta de Siloé, en el marco de las manifestaciones y jornadas de movilización que se conocieron como el “PARO NACIONAL DEL 2021”, distando de toda prueba documental, testimonial o pericial que pretenda señalar algún tipo responsabilidad por parte de algún miembro de la Policía Nacional en los hechos citados, situación de vital importancia para dar inicio a la narración de los hechos.

Ahora bien, los postulados facticos que se procuran hacer valer en la demanda, es importante mencionar que los hechos se pretenden enmarcar dentro de las acciones criminales acaecidas en el marco de la protesta social iniciada el pasado 28 de abril de 2021 en la ciudad de Cali y otros municipios del Valle del Cauca, donde grupos delincuenciales delimitaron sus jurisdicciones realizando retenes ilegales y obstrucciones a las vías pública con el fin de controlar el ingreso de personas y cobrar por el paso de vehículos. Como quiera que los hechos comunicados datan del 04 de mayo de 2021 en jurisdicción del municipio de Cali, deben considerarse que nada tenían que ver con la llamada protesta social, donde el único propósito era vandalizar estaciones de servicio de gasolina, centros comerciales, tiendas de barrio, supermercados, hurtos a personas del común, destrozos a diferentes lugares, entre otros; esto permite inferir que hay una clara diferencia entre quienes marchan pacíficamente y quienes con su actuar violento afrentan a la Nación, afrentan al Estado Social de Derecho, a la institucionalidad y la legitimidad del Gobierno y de su Fuerza Pública.

Resulta imperioso expresar que la Policía Nacional, como Institución que contribuye a la convivencia y seguridad ciudadana, dispuso toda su capacidad logística para

contrarrestar éstos hechos que afectaron el orden público, denotando una eficiente intervención con su personal y el apoyo significativo de medios técnicos, medios logísticos; lo que permitió adoptar todas las estrategias necesarias para contrarrestar estos hechos de reproche; destacando que es por ello que la Policía Nacional de Colombia es pionera en el mundo en la implementación y certificación de criterios de calidad y dispone de protocolos internos que cumplen con los estándares internacionales para el uso de la fuerza. De lo anterior debe destacarse la eficiente intervención del personal de la Policía Nacional en la jurisdicción del municipio de Cali, donde se dispuso significativo apoyo, del todo el posible con personal uniformado, medios técnicos, medios logísticos y se adoptó todas las estrategias necesarias para contrarrestar estos hechos de reproche.

El apoderado actor pretende endilgar responsabilidad bajo el título subjetivo de falla en el servicio, manifestando:

"...En el presente caso se tiene que el régimen de responsabilidad es la falla en el servicio adjudicada al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y a la Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaria de Seguridad y Justicia y Secretaría de Gobierno de Cali, en el que a los demandantes les basta probar la existencia del daño, del hecho dañoso y del nexo causal entre el primero y el segundo. Es claro en tal sentido que el homicidio de NEISON SANCHEZ GONZALEZ fue ejecutado bajo absoluto estado de indefensión en medio de las protestas que se desarrollaron en el Paro de 2021 en la ciudad de Cali. Y este tipo de acciones se encuentran enmarcadas en un proceso sistemático de crímenes cometidos por la Policía Nacional en las protestas sociales, tal como lo evidenció la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en su pronunciamiento del año 2020 en relación a que en Colombia: sí se plantea un conflicto de vulneración generalizada y reiterada de los derechos a la protesta, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, libertad de expresión, reunión y circulación..."

De lo anterior se puede inferir, que se pretende endilgar falla en el servicio a la Policía Nacional y al Municipio de Santiago de Cali, esgrimiendo argumentos subjetivos, pues debe considerarse que no se establece con certeza u objetividad que los lamentables hechos fueran ocasionados por algún uniformado de la Policía Nacional. Además de ello no se evidencia que obre estudio balístico de uniprocedencia, donde se establezca que las heridas de arma de fuego que se informan hayan sido disparadas por arma de dotación oficial. Ahora bien en cuanto se refiere a las heridas con arma corto punzante, debe decirse que el personal de la Policía Nacional no ostenta esa clase de armas como elemento de dotación para prestar su servicio, por tanto no pudo ser ocasionada por los mismos.

En este orden de ideas, no existe criterio de causalidad que permita vincular la conducta o comportamiento de algún funcionario de la Policía Nacional con los actos o hechos desencadenantes del daño, pues no obran elementos de convicción que permitan dar cuenta de las circunstancias en las cuales se produjo el hecho dañoso. En el caso concreto, se puede establecer, que si bien hay un daño, no se ha demostrado hasta esta instancia una conducta activa u omisiva por parte del algún funcionario de la Policía Nacional, por tanto se rompe la relación de causalidad, sin llegar a demostrar que el daño se ocasionó como actuación u omisión de algún funcionario de la institución.

Así las cosas, hay un rompimiento del nexo causal y no están llamadas a prosperar las pretensiones del demandante, en atención a que NO existió falla del servicio u omisión de protección por parte de la Policía Nacional pues se trata de hechos no

probados dentro del traslado, y donde se evidencia la actividad ilegal, furtiva y continuada de terceros.

Corolario a lo anterior, solicito que se despachen negativamente las pretensiones de la demanda, en razón de que todas estas constituyen meras apreciaciones subjetivas de la parte actora, además considero que no se estructuran en el sub-judice los presupuestos para responsabilizar Administrativamente a la entidad que represento dado que la actuación que dio origen al perjuicio cuyo resarcimiento se reclama no es Administrativa ni vincula mucho menos el proceder de la Administración.

RAZONES DE LA DEFENSA

Debo iniciar por referirme a la supuesta situación fáctica expresada por el apoderado actor, aduciendo que el día 4 de mayo del 2021 el señor NEISON SÁNCHEZ GONZÁLEZ (q.e.p.d), se encontraba participando de las actividades que se realizaban en la glorieta de Siloé en el marco de las manifestaciones y jornadas de movilización que se conocieron como el "PARO NACIONAL DEL 2021", quien ejercía su derecho a la protesta social en contra del Gobierno Nacional.

Seguidamente, siendo las 11:40 pm del día 4 de mayo de 2021 el señor NEISON SÁNCHEZ GONZÁLEZ (q.e.p.d), fue trasladado a la Red de Salud de Ladera de Siloé y su ingreso lo realizan dos hombres en una motocicleta, quienes lamentablemente dejan el cuerpo sin signos vitales en el sitio y se retiran.

Posteriormente, a eso de las 00:25 horas del día 5 de mayo de 2021 la Policía Nacional recibe reporte vía radial del ingreso al puesto de salud de Siloé de un cuerpo sin vida de sexo masculino el cual presento presentó ocho heridas por arma de fuego, once heridas por arma corto punzante, heridas contundentes, heridas por quemaduras.

Según protocolo de Necropsia, fijo en causa de muerte politraumatismo por heridas por proyectil de arma de fuego y arma corto punzante que causaron muerte violenta tipo homicidio.

Así las cosas su señoría, los hechos y pretensiones que se procuran hacer valer en la presente demanda, tiene su génesis enmarcada con la presunta acción u omisión realizada por parte de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el escuadrón móvil de antidisturbios (ESMAD), el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), y la actuación de la Alcaldía municipal de Santiago de Cali, ante una posible falla en el servicio de las entidades demandadas, por el lamentable asesinato del señor NEISON SÁNCHEZ GONZÁLEZ (q.e.p.d).

Por lo anterior y una vez estudiado el expediente, considero que el apoderado actor ha realizado una serie de argumentaciones de carácter subjetivo y personal en aras de darle sentido a sus pretensiones, conllevado a determinar que son meras aserciones de las cuales no aparece prueba alguna que demuestre la posible extralimitación en sus funciones realizada por algún miembro de la Policía Nacional, dado que ni en los hechos ni en las pruebas aportadas se menciona de manera objetiva las circunstancias de modo, tiempo y lugar que conllevaron la desafortunada muerte del señor NEISON SÁNCHEZ GONZÁLEZ (q.e.p.d).

Lo citado, enmarca todo el recaudo probatorio que la parte actora pretende hacer valer desde la solicitud de conciliación, distando de toda prueba documental, testimonial o pericial que pretenda señalar algún tipo de responsabilidad por parte de algún miembro de la Policía Nacional en los hechos debatidos.

En este orden de ideas, hay un rompimiento del nexo causal y no están llamadas a prosperar las pretensiones del demandante, asimismo, el libelo aportado debe tener relación con los hechos y estos deben probarse, pues las mismas carecen de sustento probatorio, y la sola afirmación de la presunta autoría por parte de algún miembro de esta institución, es decir la hipotética acción u omisión de la Policía Nacional, no puede constituirse en el título de imputación de responsabilidad de mi representada.

En casos como el presente, le corresponde a la parte demandante acreditar los elementos que configuran la responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Administración: **actuación u omisión del Estado, daño antijurídico y nexo causal entre aquella y estos**, extremos que no se encuentran demostrados en el asunto sub examine, razón por la cual dicha omisión imposibilita al Honorable Juez abordar el estudio respecto de si constituye deber jurídico de la demandada resarcir los perjuicios que del daño se hubieren derivado.

Respecto de la causalidad como elemento de responsabilidad del Estado, la Sala de manera reiterada ha sostenido¹:

“Más allá de la compleja cuestión relacionada con la identificación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado a partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991², incluso frente a supuestos que han dado lugar a comprensiones —al menos en apariencia— dispares en relación con dicho extremo³, la Sala ha reconocido que con el propósito de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en cualquier supuesto concreto, resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada⁴.

Por lo tanto, una vez analizados en forma conjunta los hechos y pretensiones de la demanda, dan lugar a indicar que es imposible pretender responsabilizar a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, debido a que como se observa en el plenario, no se han demostrado todos y cada uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual del Estado – Policía Nacional y mucho menos se ha demostrado la supuesta relación de causalidad; aunado a lo anterior, podemos decir desde ya, que partiendo de las circunstancias planteadas en la demanda que carecen de exactitud y pruebas determinantes que sustenten su veracidad, estaríamos frente a eximentes de responsabilidad como más adelante me referiré.

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero del 2009. Exp. 17.145 y del 20 de mayo del mismo año, Exp. 17.405.

² La complejidad del asunto traído a colación quedó puesta de presente, por vía de ejemplo, con ocasión de la aprobación del siguiente pronunciamiento por parte de esta Sala: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de mayo de dos mil siete (2007); Consejero ponente: Enrique Gil Botero; Radicación número: 76001-23-25-000-1996-02792-01 (16898). En aquella oportunidad, la posición mayoritaria de la Sala se inclinó por señalar

En el caso en estudio no existió falla o falta en el servicio, puesto que se configura el fenómeno jurídico de hecho exclusivo y determinante de un tercero, pues el acto generador del daño fue causado por la actividad furtiva y continuada por algunos individuos, ajenos a la institución, así como tampoco puede atribuirse actuación alguna de la Policía Nacional, por cuanto los hechos fueron ejecutados de manera enigmática por terceros.

que lo procedente de cara a llevar a cabo "...el análisis de los elementos que constituyen la responsabilidad extracontractual del Estado", es acometer dicha tarea "...a través de la siguiente estructura conceptual: 1º) daño antijurídico, 2º) hecho dañoso, 3º) causalidad, y 4º) imputación". Empero, frente a la anotada postura, el Magistrado Enrique Gil Botero optó por aclarar su voto por entender que la comprensión que se viene de referir "...desconoce los postulados sobre los cuales se fundamenta la responsabilidad del Estado a partir de la Carta Política de 1991, en tanto el artículo 90 del estatuto superior estableció sólo dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación del mismo a una autoridad en sentido lato o genérico".

3 De hecho, en el pronunciamiento que acaba de referenciarse —nota a pie de página anterior—, a pesar de la claridad en torno al título jurídico de imputación aplicable al asunto de marras —riesgo excepcional derivado del funcionamiento de redes eléctricas y de alto voltaje—, las súplicas de la demanda fueron desestimadas porque desde el punto de vista de la causalidad, esto es, desde una perspectiva eminentemente naturalística, fenomenológica, el actor no consiguió demostrar el acaecimiento del suceso que atribuía a la entidad demandada —una sobrecarga eléctrica— y con fundamento en el cual pretendía que se atribuyese responsabilidad indemnizatoria a ésta última como consecuencia del advenimiento de los daños que —esos sí— fueron cabalmente acreditados dentro del plenario. Y adviértase que en relación con el sentido de la decisión —y, por tanto, en relación con esta manera de razonar— no hizo explícito, en la también referida aclaración de voto, su desacuerdo el H. Consejero de Estado que la rubricó.

4 El énfasis ha sido efectuado en el texto original. Cfr. ENNECCERUS, LUDWIG-LEHMANN, HEINRICH, Derecho de las obligaciones, 11ª edición, traducción de B., Pérez González y J., Alguer, Barcelona, Bosch, 1948, citado por GOLDENGERG, Isidoro, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, cit., p. 10. Por la misma senda marchan los planteamientos de Adriano DE CUPIS, quien no obstante considerar operativo el tema de la relación de causalidad al interior del análisis jurídico, estima existente la que denomina "causalidad jurídica" misma, que a su entender "no es más que un corolario del principio enunciado por nosotros, según el cual, el contenido del daño se determina con criterios autónomos [en el ámbito jurídico]. Debemos preocuparnos de averiguar no ya cuándo el daño pueda decirse producido por un hecho humano **según las leyes de la naturaleza**, sino más bien cuándo ese daño pueda decirse **jurídicamente** producido por un hecho humano" (énfasis en el texto original). Cfr. DE CUPIS, Adriano, El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, traducción de la 2ª edición italiana por A. Martínez Sarrión, Bosch, Barcelona, 1975, p. 248.

Es difícil de controlar para las autoridades policiales no solo de Colombia, sino de todo el mundo, en el sentido de inmediatez e imposibilidad para poder evitar este tipo de actos que como se ha venido mencionado son de terceros, y que a pesar de la actividad preventiva y disuasiva de la Policía Nacional, esto no se puede evitar, y del mismo modo, es ilógico pretender responsabilizar a la Policía Nacional por actos ajenos a la Institución, sin tener ningún grado de responsabilidad en este tipo de hechos como buscando culpables sin tener bases o nexos sobre la creación del riesgo.

Por todos los argumentos de defensa arriba expuestos y teniendo en cuenta el material probatorio allegado al proceso hasta el momento, se observa que si bien en el presente caso se ha acreditado el daño, sobre los demás supuestos esenciales para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, no se ha allegado prueba alguna que permita evidenciar la existencia de una relación de causalidad entre el daño y la actuación o el riesgo creado, pues evidentemente los perjuicios causados a los demandantes, fueron ocasionadas parte de personas ajenas a la Policía Nacional, es decir, TERCEROS.

Al respecto tenemos que tampoco se ha acreditado actuación irregular alguna por parte de mi representada que lleve a determinar que, en efecto, fue un funcionario de la Policía Nacional quien generó los perjuicios a los demandantes, pues no se ha demostrado por parte de la Policía Nacional responsabilidad alguna; pues los lamentables hechos fueron producto del actuar reprochable de TERCEROS.

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA SUBSECCION A, Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ - Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011). Radicación número: 6600123-31-000-1998-00409-01(19067) Actor: NOHELIA DEL SOCORRO LONDOÑO GIRALDO Y OTROS.

"En cuanto tiene que ver con la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (artículo 64 del Código Civil) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados.

Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina:

«La imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida».

Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de "imprevisto" de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil y la, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual imprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia". La recién referida acepción del vocablo "imprevisible" evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

Así Pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras, acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo "inimaginable" de la causa extraña.

Aunado a lo anterior, se logra evidenciar que las pruebas aportadas por la parte actora resultan insuficientes para demostrar la falla del servicio o un título de imputación objetivo en cuanto a mi prohijada, en consecuencia, corresponde a la parte actora acreditar cada uno de los elementos de la responsabilidad del Estado respecto del daño que sirve de fundamento a la presente acción.

La carga de la prueba compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte, de acuerdo con el artículo 167 del C.G.P, y si bien la ley faculta al Juez para decretar pruebas de oficio, tal posibilidad no puede convertirse

en un instrumento que supla las obligaciones que corresponden a las partes en el proceso.

Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, conoce de antemano cuáles de los hechos interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos.

Siendo así, por deficiencia probatoria no es posible atribuir responsabilidad alguna a la Administración Pública, pues es indispensable demostrar, por los medios legalmente dispuestos para ello, todos los hechos que sirvieron de fundamento fáctico de la demanda y no solo la mera afirmación de los mismos, para poder establecer cuál fue la actividad del ente demandado que guarda el necesario nexo de causalidad con el daño y que permita imputarle la responsabilidad a aquel, situación que no se dio en el sub lite.

En directa alusión al artículo 167 del Código General del Proceso, sobre la carga de la prueba, que indica:

Artículo 167. Carga de la prueba.

Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

No se logra demostrar la omisión, negligencia o inactividad, aun cuando es evidente que nos encontramos frente a un hecho de un tercero, el cual tiene las características de ser imprevisible e irresistible.

Con relación a lo anterior el Estado con fundamento en el artículo 2º de la Constitución se encuentra obligado a garantizar la integridad y la vida de los coasociados, tal obligación encuentra sus limitantes conforme con las medidas de protección y contingencia exigidas en un margen de parámetros normales para controlar el despliegue de la actividad delictual.

En este punto es pertinente resaltar que la jurisprudencia del Honorable Consejo de estado ha indicado que los casos como este se deben exonerar a la institución para ausencia de pruebas que determinen la responsabilidad estatal veamos:

En hora buena el Honorable CONSEJO DE ESTADO ha dado una pauta jurisprudencial cuando fijó desde la sentencia del 18 de diciembre de 1997, con ponencia del Doctor JESÚS MARÍA CARRILLO BALLESTEROS, en el expediente de radicado 12.942, cuyo actor fue la Señora MIRNA LUZ CATALÁN BARILIO, en la cual señaló:

“...En efecto en el plenario no obra ningún medio de prueba que lleve a la convicción que los estamentos de seguridad del Estado fallaron a sus deberes constitucionales y que ello dio entrada a la responsabilidad de la administración...”

Es verdad que a la luz de lo dispuesto en la Constitución la fuerza pública está instituida para salvaguardar las condiciones necesarias del ejercicio de libertades públicas y para asegurar la convivencia pacífica de los colombianos. Sin embargo, este deber constitucional no reviste un carácter absoluto, porque si bien es incuestionable que la Policía Nacional debe velar por la seguridad de los ciudadanos, esta obligación debe cumplirse de acuerdo a los medios a su alcance, ya que resultaría prácticamente imposible de que dispusiera de un policía para cada ciudadano colombiano”. (Subrayado y negrillas fuera de texto).

En conclusión, no existe criterio de causalidad que permita vincular la conducta o comportamiento de la víctima con los actos o hechos desencadenantes del daño, pues no obran elementos de convicción que permitan dar cuenta de las circunstancias en las cuales se produjo el hecho dañoso.

En el caso concreto, se puede establecer, que si bien hay un daño, no se ha demostrado hasta esta instancia una conducta activa u omisiva por parte del algún funcionario de la Policía Nacional, por tanto se rompe la relación de causalidad, sin llegar a demostrar que el daño se ocasionó como actuación u omisión de algún funcionario de la institución.

La autoridad de policía tiene como fin principal la prevención de aquellas conductas que constituyen amenazas de afectación del orden público o impiden la convivencia entre las personas. Las medidas para preservar el orden público y la convivencia provienen del poder de policía, la función y la actividad de policía materializada en órdenes, **cada uno ejercido por distintos estamentos**, los cuales encuentran límites definidos por la Constitución y por la ley.

Lo anterior para analizar si procede declarar la responsabilidad del Estado por la omisión en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligatorio que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el ente implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo, por parte de la autoridad demandada en el caso concreto.

Así, pues, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el mandato que impone el inciso 2º del artículo 2º de la Constitución, consistente en que las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, **“debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”**. En ese orden, las obligaciones que están a cargo del Estado -y por lo tanto la falla del

servicio que constituye su trasgresión-, han de examinarse en concreto frente al asunto particular que se juzga, tomando en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo.

De esta suerte, y aun cuando nada dijeron los demandantes sobre haber acudido de manera previa ante las autoridades de policía por vía del ejercicio del derecho fundamental de petición a requerirles la adopción en su favor de medidas preventivas o de protección, lo que permite suponer que no han iniciado ningún tipo de actuación en este sentido, las aludidas acciones contenciosas harían parte del elenco de dispositivos legales idóneos al que todas las personas deben acudir, preferentemente, para garantizar la protección de sus derechos constitucionales, incluyendo los de raigambre fundamental, cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por las autoridades públicas encargadas de ejecutar la prestación del servicio de protección, pues son cauces a través de los cuales puede debatirse más ampliamente la legalidad de sus procedimientos, el potencial enervamiento de los efectos nocivos que producen y, en últimas, si dan lugar a una eventual declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado.

En ese orden de ideas, la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha sido reiterada y uniforme en el sentido de señalar que bajo dicho título de imputación-falla en el servicio- se requiere de la concurrencia de (i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado [o determinable], que se infringe a uno o varios individuos; (ii) una conducta activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública, con la cual se incumplen o desconocen las obligaciones a cargo de la autoridad respectiva, por haberle sido atribuidas las correspondientes funciones en las normas constitucionales, legales y/o reglamentarias en las cuales se especifique el contenido obligacional que a la mencionada autoridad se le encomienda y (iii) una relación o nexo de causalidad entre ésta y aquél, vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la circunstancia consistente en que el servicio o la función pública de la cual se trate, no funcionó o lo hizo de manera irregular, ineficiente o tardía.

HECHO DE UN TERCERO

En el caso concreto se puede establecer que, si bien hay un daño la cual fue acreditado con la lamentable muerte del señor NEISON SÁNCHEZ GONZÁLEZ (q.e.p.d), no se ha demostrado hasta esta instancia una conducta activa o negligente por parte del algún funcionario de la Policía Nacional, por tanto, se rompe la relación de causalidad, sin llegar a demostrar que el daño se ocasionó como actuación u omisión de algún miembro de la institución.

Aunado a ello, es difícil de controlar para las autoridades policiales no solo de Colombia, sino de todo el mundo, en el sentido de inmediatez e imposibilidad para poder evitar este tipo de actos que son de terceros, y que a pesar de la actividad preventiva y disuasiva de la Policía y demás Fuerza Pública, esto no se puede evitar, y del mismo modo, es ilógico pretender responsabilizar a la Policía por actos ajenos a la Institución, sin tener ningún grado de responsabilidad en este tipo de hechos como buscando culpables sin tener bases o nexos sobre la creación del riesgo.

Podemos inferir que se está frente a una causal exonerativa de responsabilidad del Estado, como lo es **EL HECHO DE UN TERCERO**. De acuerdo con el Consejo de Estado, “el hecho de un tercero exonera de responsabilidad a la administración, siempre y cuando se demuestre que dicho tercero es completamente ajeno al servicio, y que su actuación no vincula de manera alguna a este último, produciéndose claramente la ruptura del nexo causal”; los argumentos para invocar éste exonerante de responsabilidad se sustentan en la confesión de la parte demandante, desconociendo para este extremo procesal como se desarrolló las circunstancias de tiempo modo y lugar.

En este orden de ideas, hay un rompimiento del nexo causal y no están llamadas a prosperar las pretensiones del actor, en atención a que NO existió falla del servicio u omisión de protección por parte de la Policía Nacional pues se trata de hechos no probados dentro del traslado de la demanda.

INEXISTENCIA NEXO CAUSAL - IMPUTABILIDAD.

Los actores afirman en su escrito de demanda que el daño resulta imputable a la demandada, por cuanto se concreta que los perjuicios sufridos por los hoy demandantes, fueron causadas por un falla en el servicio por parte de la Policía Nacional en uso y desarrollo de sus funciones, situación que no se verificó por ningún medio de prueba fehaciente y contundente.

Así las cosas, no se encuentra probada la existencia de un daño antijurídico ocasionado a los demandantes, pues no existe un nexo causal entre el daño irrogado y el actuar a título de culpa atribuible a los miembros de la Policía Nacional.

Ahora bien, si bien hay un presunto daño no probado hasta esta etapa procesal, no existe en el plenario prueba que conduzca a la certeza que las lesiones mortales originadas por arma de fuego y arma corto punzante que presento el señor NEISON SÁNCHEZ GONZÁLEZ (q.e.p.d), hayan sido ocasionadas por algún miembro de la policía nacional, desconociendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

INEXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DE IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Como quiera que el daño antijurídico no está acreditado y no se acreditara durante el presente proceso, es inoficioso por parte del Honorable Despacho, realizar un estudio de responsabilidad, por más que se encuentre probada alguna falla o falta en la prestación del servicio, tal como lo estableció el honorable Consejo de Estado en reciente Jurisprudencia (Sentencia del 23 de septiembre de 2015, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA Radicación numero: 76001-23-31000- 2008-00974-01(38522) Actor: OMAR DE JESÚS CORTÉS SUÁREZ Y OTRA).

En virtud de la anterior jurisprudencia, se tiene que el “artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En cuanto a los elementos para que proceda la responsabilidad del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterada y uniforme en el sentido de señalar que deben concurrir los elementos demostrativos de la existencia de: (i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado –o determinable–, (ii) una conducta activa u omisiva, jurídicamente imputable a la administración y (iii), cuando hubiere lugar a ella, una relación o nexo de causalidad entre ambas, es decir, que el daño se produzca

como consecuencia directa de la acción u omisión de la autoridad pública de que se trate.

El daño –a efectos de que sea indemnizable– requiere estar cabalmente estructurado, razón por la cual se torna imprescindible acreditar que satisface los siguientes requisitos: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo, ii) debe lesionar un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y iii) debe ser cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura. (...) como quiera que la antijuricidad del daño es el primer elemento de la responsabilidad, una vez verificada su existencia se debe determinar si es imputable o no a la entidad demandada; por tanto, le corresponde al juez constatar el daño como entidad, como violación a un interés legítimo, valorar si es o no antijurídico y, una vez estructurado como tal, analizar la posibilidad de imputación o no a la entidad demandada. Si el daño no está acreditado, se torna inoficioso el estudio de la responsabilidad, por más que se encuentre acreditada alguna falla o falta en la prestación del servicio por parte de la Administración”

LA EXCEPCIÓN GENÉRICA

Finalmente propongo, en nombre de mi representada, la excepción genérica aplicable al caso sub judice como quiera que dicho precepto legal faculta al fallador para que de manera oficiosa declare en la sentencia, cualquier otro hecho que se encuentre debidamente demostrado y que constituya una excepción que favorezca a la Institución hoy demandada, y que no haya sido alegado expresamente en la contestación de la reforma de la demanda.

PRUEBAS

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 175 del CPACA, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar de manera respetuosa al Honorable Juez tener en cuenta ALGUNAS de las pruebas que obran en el plenario y las solicitadas u oficiosas en lo que favorezca a la entidad que represento, con el fin de no generar duplicidad de documentos dentro del expediente que se adelanta en su Honorable Despacho.

OBJECCIÓN DE PRUEBAS SOLICITADAS - TRASLADAS – OFICIOS

Sea lo primero en advertir, que se denota con claridad y precisión, que las documentales requeridas por la parte activa a través de su abogado de confianza, corresponden precisamente a las que debió allegar con el escrito de la demanda o por lo menos, anexar el trámite de los requerimientos de las mismas y no trasladar la carga de la prueba al Juez de la República; razón por la cual, solicito a su despacho, negar lo solicitado en el acápite DE PRUEBAS TRASLADAS – OFICIOS, lo cual tiene respaldo Constitucional y Legal, puesto que solo hubiese bastado requerirlos por escrito (derecho fundamental de petición – art. 23 C.P.C.), bien por los demandantes o su apoderado judicial de confianza, trámite al cual estaban obligados atendiendo la carga de la prueba y no trasladársela al Despacho Judicial Administrativo, procedimiento que a bien tuvo el Legislador Colombia establecerlo en la Ley 1564 del 12 de junio de 2012 “Código General del Proceso”, así:

(...)

CAPÍTULO V

Deberes y Responsabilidades de las Partes y sus Apoderados.

Artículo 78. Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados:

(...)

10. ABSTENERSE DE SOLICITARLE AL JUEZ LA CONSECUCIÓN DE DOCUMENTOS QUE DIRECTAMENTE O POR MEDIO DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN HUBIERE PODIDO CONSEGUIR.

(...)

Artículo 173. Oportunidades probatorias.

Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. EL JUEZ SE ABSTENDRÁ DE ORDENAR LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS QUE, DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE DERECHO DE PETICIÓN, HUBIERA PODIDO CONSEGUIR LA PARTE QUE LAS SOLICITE, SALVO CUANDO LA PETICIÓN NO HUBIESE SIDO ATENDIDA, LO QUE DEBERÁ ACREDITARSE SUMARIAMENTE. (Mayúsculas, subrayado y negrillas para resaltar).

(...)

Mandatos legales que sustentan las objeciones a las pruebas solicitadas por los demandantes a través del togado de su confianza, quienes estaban en la obligación de allegar las pruebas que sustentaran los hechos y el petitum de la demanda o por lo menos acreditar sumariamente el requerimiento de las mismas; sin embargo, se omitió este deber y responsabilidad por parte de los participantes en calidad de demandantes (abogado – cliente), quienes ahora pretenden enmendar su omisión requiriendo ante el Juez Administrativo que se las decrete y practique, es decir, demandan y que la jurisdicción se encargue de conseguirle las pruebas para así demostrar los hechos y acreditar el petitum.

En conclusión, señor Juez de la República, analizada de forma individual y conjunta las solicitudes o requerimientos propuestos por el señor abogado de confianza de los demandantes, conllevan a concluir que se tiene pleno desconocimiento de la exigencia de la carga probatoria, la cual recae sobre quién debe demostrar las pretensiones y los hechos, en aras de satisfacer las exigencias procedimentales del artículo 177¹ del Decreto 1400 del 06 de agosto de 1970 “Código de Procedimiento Civil”, ahora artículo 167² de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 “Código General del

¹ ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba

² Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

Proceso", más, si se tiene en cuenta que todo lo pretendido era de posible obtención, y no trasladar al Honorable Juez para que se las decrete, cuando debieron allegarlas con el escrito de la demanda o por lo menos, haber realizado el procedimiento o tramite en la búsqueda de las pruebas, lo cual brilla por su ausencia dejando en este punto sin pruebas que sustenten el petitum.

PETICIÓN

De manera respetuosa, me permito solicitar ante el Despacho del Señor Juez, se denieguen en su totalidad las pretensiones de la parte actora y se exonere de responsabilidad a la **NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL**, de conformidad con lo expuesto en el presente memorial y los documentos que obran en el proceso, toda vez que no se encuentran plenamente demostrados los elementos constitutivos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado, rompiéndose por completo el **NEXO CAUSAL**, que debe existir entre los hechos expuestos y el supuesto daño causado a la parte demandante; además porque podemos estar incurso en el **HECHO EXCLUSIVO DETERMINANTE DE UN TERCERO Y CARENCIA PROBATORIA**, toda vez que existe una evidente ausencia de pruebas que demuestren la responsabilidad de la entidad demandada.

NOTIFICACIONES

En atención a los artículos 197, 203 y 205 del CPACA; el representante legal de la Entidad demandada, así como al apoderado podrá ser notificados personalmente en la Carrera 3 Norte #. 24N-16, Barrió el Piloto de la Ciudad de Cali, Comando de Policía la Piloto – 3 Piso, Email deval.notificacion@policia.gov.co, Teléfono: 3002863531.

El suscrito apoderado recibirá además notificaciones en la secretaria de su despacho.

Del Honorable Juez;



GABRIEL ANDRES GALLEGO OLAYA

C.C No. 10.499.527 de Santander de Quilichao (cauca)

TP No. 289.834 C. S de la Judicatura.